

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Adriana María Gutiérrez Escobar
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A. – Seguros de Vida Alfa S.A. – Junta Regional de Calificación de Invalidez
PROCEDENCIA	Juzgado 15 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 015 2020 00432 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 001 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de invalidez de origen común – Dictamen decretado en segunda instancia no le dan PCL igual o superior al 50%.
DECISIÓN	Confirma sentencia absolutoria

En la fecha, **veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por los magistrados María Eugenia Gómez Velásquez, Nancy Gutiérrez Salazar, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de **Adriana María Gutiérrez Escobar**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario que promoviera en contra de **Porvenir S.A., Seguros Alfa S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez**. Radicado único nacional 05001 3105 **015 2020 00432** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 001**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

La demandante convocó a juicio a las accionadas pretendiendo se declare la nulidad de los dictámenes emitidos por Seguros Alfa S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez; en consecuencia, se establezca que cuenta con una PCL del 50% de origen común estructurada el 20 de marzo de 2020, condenándose a Porvenir S.A. a reconocerle y pagarle pensión de invalidez, incluidas las mesadas adicionales, intereses moratorios o en subsidio indexación, y costas del proceso.

En sustento de ello afirma que, se encuentra afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, siendo calificada por Seguros Alfa S.A., con una PCL del 29,73% de origen común, estructurada el 19 de febrero de 2019, y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con una PCL del 37,23%, ratificándose lo dicho por la aseguradora, frente al origen y la fecha en que se originó la misma. Afirma que el 06 de agosto de 2020 se sometió a valoración por parte del Doctor José William Vargas Arenas, quien le estableció una PCL del 52,19% estructurada el 20 de marzo de 2020, contando con los requisitos para el otorgamiento de la pensión por tal riesgo, en tanto, las experticias rendidas por las anteriores entidades no reflejan una coherencia frente a las patologías padecidas.

En auto del **18 de enero de 2021 se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, una vez enteradas las demandadas de la existencia del proceso, procedieron a allegar contestación, así:

AFP Porvenir S.A., admite la afiliación al fondo desde el 14 de enero de 2002 y, las calificaciones de PCL realizadas por Seguros Alfa S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez, las cuales, aclara, son coherentes, claras y precisas en su contenido, además que contienen la totalidad de valoraciones médicas de la actora y la aplicación estricta de las

disposiciones legales, adicional a que no se ha efectuado reclamación de la pensión; con relación a los demás supuestos de hecho, esgrime que no le constan o no son ciertos. **Resistió las pretensiones**, formulando excepciones de mérito tendientes a enervarlas, tales como, prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones, falta de acreditación de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión, petición antes de tiempo, compensación, buena fe, necesidad de equilibrio financiero del sistema y la innominada o genérica.

Seguros de Vida Alfa S.A., acepta la afiliación de la actora a Porvenir, la experticia de la Junta Regional de Calificación, y la que ellos efectuaron, indicando que la misma se realizó con base en los criterios establecidos en el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente para la fecha de la valoración, de ahí que ALFA, entidad facultada por el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 para realizar la calificación de PCL de la demandante, dio cumplimiento a su obligación legal, a través del dictamen pericial que efectuó con el lleno de los requisitos legales, esto es, indicando el porcentaje de PCL, el origen y la fecha de estructuración. Los demás hechos no le constan o no son ciertos. **Se opuso a la prosperidad de las pretensiones** al haber sido calificada la demandante en dos instancias, las cuales determinaron que no presenta una PCL superior al 50%. Finalmente, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, hecho exclusivo de un tercero, buena fe, necesidad de equilibrio financiero, compensación y la innominada o genérica.

Junta Regional de Calificación de Invalidez, rechazó las pretensiones, al ajustarse el dictamen emitido de manera estricta y objetiva al Manual Único de Calificación de Invalidez, Decreto 1352 de 2013, sin que se hubiese vulnerado derecho alguno. Frente a los hechos acepta la afiliación

de la actora al régimen de ahorro individual con solidaridad, así como el dictamen emitido por Seguros Alfa S.A., y por esa entidad. Por último, presenta **las excepciones** de validez del dictamen, determinación de la pérdida de capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración ajustadas a derecho, específicamente al manual único de calificación, inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, buena fe, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar, estado clínico de la paciente pudo variar después de emitido el dictamen, lo cual, exime de responsabilidad.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en la que declaró la validez de los dictámenes rendidos por Seguros Alfa S.A., y por la Junta Regional de Calificación, sin que cumpla la afiliada con el porcentaje mínimo de PCL para el reconocimiento de la pensión; en consecuencia, absolvió a las demandas de las pretensiones. Impuso costas a cargo de la vencida y en favor de las accionadas, fijando el monto de las agencias en derecho en la suma de \$3.000.000,00.

Argumentó la juzgadora que, atendiendo la interpretación del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, al ser Porvenir S.A. la encargada del reconocimiento de una prestación, se le debe respetar el derecho de defensa y contradicción, y en razón a ello es que la ley estableció una serie de instancias para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, donde se le notifica a cada uno de los interesados la decisión a fin de que interpongan los recursos de Ley, debiéndose tener presente para el caso, que el único dictamen que establece una PCL superior al 50% es el aportado con la demanda, sin que se hubiese manifestado inconformidad por el emitido por la Junta Regional, adicional a que la activa no explica cuáles fueron los errores o vicios de que adolecen las valoraciones realizadas a fin de declarar la nulidad de las mismas, y sin que para la judicatura el hecho de que exista una valoración

posterior por un particular sea fundamento para dejar sin efecto los demás dictámenes, al haber sido emitidos teniendo en cuenta la normatividad vigente, el manual único de calificación, la historia clínica, adicional a que fueron concisos, claros, sólidos, confiables, debiéndose por tanto respetar su contenido .

Inconforme con la anterior decisión **la parte demandante interpuso recurso de apelación**, solicitando su revocatoria y con ello, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, advirtiendo que en el marco de la Ley procesal laboral y de la seguridad social, no existe norma que establezca el agotamiento de algún tipo de recurso o instancia para acudir a la jurisdicción a solicitar la nulidad de un dictamen, criterio que ha sido acogido por la Corte Constitucional.

Agrega que, amparando el modelo de discapacidad, la misma tiene diferentes patologías que generan incapacidades, las cuales, fueron correctamente aterrizadas en la valoración realizada por el Doctor Vargas Arenas el 6 de agosto de 2020, evidenciándose, por el contrario, anomalías en la tabla y diagnósticos tenidos en cuenta por Alfa Seguros de Vida S.A..

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso la **demandante**, solicitando acoger el dictamen aportado y no el emitido por el CES, al ir en contravía de la convención de los derechos de las personas con discapacidad - la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad- aprobada a través de la Ley 1346 de 2009, por lo que el Estado debe reconocer las barreras con las que cuenta, en tanto, su limitante no es su condición física sino el entorno social que sufre, supuesto que también se encuentra plasmado en la SL1171-2022.

Esgrime que la experticia desconoce los padecimientos que padece en ambas piernas, por lo que, al valorarse solo el miembro inferior derecho, va

en contravía de lo regulado en el Decreto 1507-2014, alusivo al principio de integralidad comprendido al ser humano en su dimensión tridimensional – volición, habitación y capacidad de ejecución, tendiente a tener en cuenta los aspectos biológicos, psíquicos y sociales.

Porvenir S.A. y Alfa S.A., afirman que de conformidad con el dictamen emitido por el CES se evidencia de manera clara que la demandante no es invalida, por lo que al tenor del artículo 167 del C.G.P. se logró demostrar que no cumple los presupuestos legales de conformidad con el artículo 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, este último modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, para acceder a la prestación económica deprecada.

Seguros Alfa S.A., en escrito aparte, esgrime que la calificación realizada por el CES, es adecuada con los puntajes relacionados según las secuelas, no existiendo razones administrativas, técnicas ni científicas para conceder el derecho.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados en los autos, no discutidos y que se tornan relevantes para resolver se tienen: que Adriana María Gutiérrez Escobar fue calificada por Seguros de Vida Alfa S.A., el **22 de octubre de 2019**, con una **pérdida de capacidad laboral del 29,73% estructurada el 19 de febrero del mismo año**, por los diagnósticos de "*SECUELAS DE POLIOMIELITIS*", "*SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO*" e "*HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO*". El 15 de abril de 2020, fue valorada por la **Junta Regional de Calificación de Invalidez**, quien le determinó una **PCL 37,23% estructurada el 19 de febrero de 2019**, agregando a los diagnósticos que fueron objeto de valoración por parte de Seguros Alfa, el

de “deficiencias por enfermedades de la tiroides”. Al trámite se allegó **experticia del 06 de agosto de 2020, rendida por el Doctor José William Vargas Arenas**, quien estableció que la señora Adriana presenta una **PCL del 52,19% estructurada el 20 de marzo de 2020**, por los diagnósticos de defecto por reducción del miembro inferior no especificado, enfermedad diverticular del intestino delgado sin perforación ni absceso, estado de artrosis, hipoparatiroidismo no especificado, hipotiroidismo no especificado, lumbago no especificado, otras gonartrosis secundarias, secuelas de poliomielitis, coxa plana y protrusión de acetábulo. De manera oficiosa esta Sala dispuso la valoración de la señora Adriana Gutiérrez, por parte del **CENDES**, entidad que **estableció que presenta una PCL del 44,8% estructurada el 19 de febrero de 2019,** data en la que se le realizó “**Evaluación por Fisiatría, que define las secuelas establecidas y se certifica que alcanzó la Mejoría Médica Máxima**” Considerándose como diagnósticos “*Gonartrosis bilateral de rodilla, Artrodesis neutra de tobillo derecho, STC moderado izquierdo, STC leve derecho, cicatrices MID (muslo y pierna), hipotiroidismo primario autoinmune controlado, hipotiroidismo parcial idiopático controlado, acortamiento de miembro inferior derecho, lumbalgia inespecífica sin compromiso neurológico, secuelas de polio en miembro inferior derecho*”

Conforme a lo anterior, **el problema jurídico** se circunscribe a establecer la eficacia probatoria del dictamen aportado con la demanda, respecto a los practicados por Seguros de Vida Alfa, la Junta Regional de Calificación de Invalidez y el decretado de manera oficiosa, a fin de determinar si a la demandante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Pues bien, debe decirse que la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-873 de 2013 ha considerado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo

vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común.

Así, atendiendo la Jurisprudencia Constitucional, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino también, de patologías que resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

De la misma manera dicha corporación ha establecido reglas procedimentales básicas que rigen las actuaciones de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral, y que conforman los contenidos mínimos del derecho fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellas: *"ii) **La valoración del estado de salud de la persona calificada debe ser completa e integral**, pues las juntas deberán proceder a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen **deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente**"* (sentencia T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de establecer, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante lo establecido en esta disposición legal, ninguna duda queda que tales

dictámenes pueden ser debatidos judicialmente, en tanto, es posible que dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar los errores en que pudo haber incurrido una pericia, por cualquier medio probatorio, atendiendo que, en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley. De acuerdo con ello, las partes tienen libertad en esta materia, pudiendo acreditar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia.

Así, al haberse presentado inconformidad por la parte demandante frente a la decisión emitida, y exponiendo argumentos que se encuentran acorde con lo establecido por la Jurisprudencia tanto de la Corte Suprema Sala de Casación Laboral, como la Constitucional, esta Sala procedió a decretar nueva prueba de oficio, para la calificación integral de la demandante, la misma fue rendida por el Cendes, quien como ya se dijo en dictamen **estableció que la actora presenta una PCL del 44,8% estructurada el 19 de febrero de 2019,** data en la que se le realizó *"Evaluación por Fisiatría, que define las secuelas establecidas y se certifica que alcanzó la Mejoría Médica Máxima"*. Valorándose los diagnósticos de *"Gonartrosis bilateral de rodilla, Artrodesis neutra de tobillo derecho, STC moderado izquierdo, STC leve derecho, cicatrices MID (muslo y pierna), hipotiroidismo primario autoinmune controlado, hipotiroidismo parcial idiopático controlado, acortamiento de miembro inferior derecho, lumbalgia inespecífica sin compromiso neurológico, secuelas de polio en miembro inferior derecho "* y teniendo en cuenta para ello, examen médico general, físico, osteomuscular, de columna, extremidades, piel, neurológico, así como una evaluación de su estado mental, dejándose consignado como conclusión que: *"Evaluada su historia clínica, revisados los resultados del examen médico pericial y los demás elementos probatorios aportados y acorde con lo establecido en el Decreto 1507 de 2014, podemos concluir que, aunque la Sra. Adriana Gutiérrez Escobar presenta actualmente una condición precaria de salud como consecuencia de sus patologías, no se alcanza el porcentaje legal del 50%,*

requerido para ser considerada una persona invalida.” Calificación, que se encuentra acorde a las deficiencias baremadas, ofreciendo plena credibilidad a la Sala, y que en lugar de desvirtuar confirma las atacadas, realizadas por Alfa S.A. y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, valorándose de manera directa a la actora, sin que sea posible modificar ninguno de los aspectos, no solo por carecer los juzgadores de los conocimientos técnicos para hacerlo, sino porque la jurisprudencia especializada es clara en indicar que:

*si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, **pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros**, así se explica en sentencia SL1021 – 2019 radicado 62309 del 27 de marzo de 2019*

Así las cosas, al ser los medios de convicción anotados los idóneos para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración de la misma, y en especial el del Cendes, al haber sido emitidos por organismos especializados en el tema y autorizados por el legislador, así como convalidar el experticio rendido por la Junta, se tienen como invariables, pues, dichos conocimientos técnicos y científicos tienen que ser refutados por un medio igual, al carecer el operador judicial de ellos (ver sentencia SL1021-2019), y al desvirtuar estos las conclusiones del dictamen de parte, de manera objetiva y atendiendo los diagnósticos, historias y valoración de la actora, lo procedente es la confirmación de la decisión revisada.

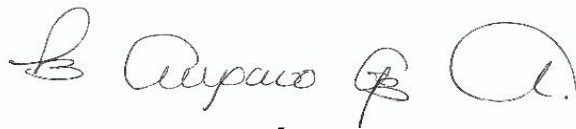
Costas en esta instancia a cargo de la actora a quien se desata adversamente el recurso. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$1.500.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por señora **Adriana María Gutiérrez Escobar**, contra la AFP **Porvenir S.A.**, **Seguros Alfa S.A.** y la **Junta Regional de Calificación de Invalidez**.

Costas en esta instancia a cargo de la actora a quien se desata adversamente el recurso. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$1.500.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

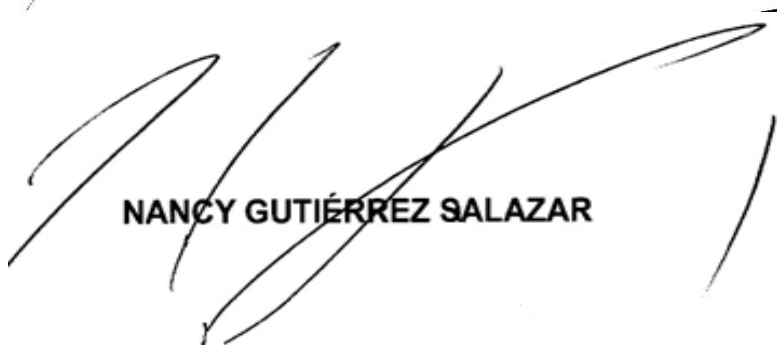
Los magistrados (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR